

LA GOBERNABILIDAD EN VENEZUELA: UN DESASTRE PREVISIBLE

Humberto NJAIM

SUMARIO: I. *Factores de ingobernabilidad*. II. *Revolución y gobernabilidad*. III. *El doble Estado*. IV. *Militarismo y gobernabilidad*. V. *Reflexiones finales*.

Este trabajo aun cuando tiene la aspiración de ir más allá de la circunstancia venezolana está inevitablemente pensado desde ella. Los ciudadanos venezolanos hemos tenido la desgracia y, quizá al mismo tiempo, la fortuna de atravesar por un proceso político desconcertante y terrible que nos ha enseñado a mirar más hondo en los fenómenos de la gobernabilidad que lo que ha sido deparado a los otros países latinoamericanos.

Forma parte de nuestra experiencia haber vivido décadas de consolidación democrática que finalmente, es necesario concluir, demostraron ser esencialmente frágiles lo cual se reveló en que culminaron en el éxito de un proyecto montado sobre la exitosa denigración de ese pasado democrático inmediato. Cuando creíamos que, al fin, habíamos superado la incapacidad latinoamericana de lograr un progreso político acumulativo y el atavismo caudillesco volvimos, sin embargo, a la disparatada improvisación institucional y, bajo la apariencia de avanzadas disposiciones constitucionales, a una dominación personalista que se presenta y justifica como revolucionaria. Pero por más voluntarismo y expresiones estentóreas, el actual régimen venezolano no escapa a las limitaciones y callejones sin salida a las que se ven abocadas las concepciones erróneas sobre el gobierno y demostrarlo será el objeto de este análisis.

El estado de cosas en Venezuela es una peculiar amalgama de personalismo, militarismo, autoritarismo y arrestos democráticos. El mantenimiento de formas democráticas es, en gran medida, simbólico respecto

de la oposición pero su violación en lo que se refiere a los propios partidarios causa estragos que, probablemente, serán más destructivos para el régimen que las acciones de una oposición desconcertada y sin norte. ¿Cómo domeñar a quienes se les ha predicado constantemente los vicios de la representación y las excelencias de la participación? Durante un tiempo podrá mantenerse la solidaridad automática con el caudillo y el ciego acatamiento a sus dictados pero en la misma medida que el proceso se consolide porque la oposición se haga inofensiva estallarán y se harán inocultables conflictos internos, y su autoritarismo se hará más visible en las propias filas. La arbitrariedad hacia lo interno tendrá que ser compensada con la arbitrariedad hacia los opositores para no dar la impresión de que se está aplicando una doble medida pues cualquier flexibilidad con los adversarios no hará sino exacerbar aún más las fricciones internas.

Es una cuestión sumamente relevante para la gobernabilidad la discusión, ya un tanto aburrida, que se desarrolla en Venezuela sobre el liderazgo de Hugo Chávez. Para el oficialismo ha desaparecido completamente de su mapa mental el tema del personalismo. Este sector se precia, más bien, de que cuenta con un liderazgo firme y decidido que le permite tomar un rumbo claro y acompasar todos sus esfuerzos a transitarlo como un solo hombre. Esta exaltación se acompaña con observaciones conmisericordias sobre la falta de claridad y conducción opositoras. Mientras que ella, a su vez, destaca las virtudes de un liderazgo colectivo, que en el fondo parece más una declaración para la galería que una convicción sincera e, incluso, desde sus propias filas surge una crítica similar a la que hace el oficialismo.

Lo anterior son algunas pinceladas del trasfondo particular desde el que comenzaremos enunciando que, de manera general entenderemos por *gobernabilidad* aquel conjunto de condiciones que permiten la realización de un buen gobierno. Por el contrario *ingobernabilidad* significará que existe un estado de cosas tal que, por más buenas intenciones y energía que tenga, el gobernante no podrá realizar la obra de gobierno que se propone. Intuimos, sin embargo, que en este trabajo nos alejamos un tanto del uso predominante en la bibliografía. Nos parece que el término gobernabilidad proviene de otras latitudes y está inspirado por realidades donde efectivamente el poder emana de abajo hacia arriba mientras que para la idiosincrasia latinoamericana lo importante es el mando, no las condiciones que permiten el mando.

En todo caso el auge de los términos *governabilidad e ingovernabilidad* nos suscita la idea de que actualmente no sólo no puede darse por supuesto el buen gobernar sino siquiera gobernar. Pero, ¿la dificultad proviene del sujeto del gobierno, el gobernante; o del objeto que es gobernado? Estas disquisiciones merecerían profundizarse mas no es el tema que quisiéramos tratar; sólo nos sirven para advertir que en lo que sigue probablemente vamos a mezclar ambos puntos de vista.

Por lo pronto, cuando nos colocamos en la situación de quienes nos gobiernan y de los inmensos problemas que han de enfrentar, nos maravillamos de que hayan estado dispuestos a cargar con semejante fardo de dificultades y hasta nos compadecemos de su suerte. Nos parece que la actividad de gobernar se desarrolla en medio de un torbellino de acontecimientos vertiginosos, demandas desmesuradas, inconformidades perpetuas y resistencias incomprensibles. En este sentido podríamos llegar a concluir que la ingovernabilidad es la regla y la gobernabilidad la excepción. Así, pues, sería necesario detenerse en algunos de los numerosos aspectos que podrían justificar tal impresión.

I. FACTORES DE INGOVERNABILIDAD

Nuestra imagen del gobierno siempre parte de que el gobernante posee un proyecto, o debería poseerlo, destinado a realizar el bien general. Este proyecto comporta algún cambio y no es inocuo respecto del *statu quo*.

Un primer problema es que al momento de llevarlo a cabo brotan, por todas partes, resistencias a veces explicables y otras sencillamente inexplicables. Es un lugar común apuntar como origen de las dificultades el juego de intereses creados para los cuales resulta amenazante cualquier cambio. Es necesario, sin embargo, ir más allá del lugar común y tratar de analizar la contextura, al menos de algún interés creado. Desde la experiencia venezolana, uno notable es el que calificaríamos como “gremialismo”. Consiste en que el bienestar de determinados grupos que realizan funciones importantes para la sociedad se antepone a los fines que ese grupo debe realizar y que justifican las ventajas e, incluso, prebendas que disfruta. Por ejemplo, un gremio de educadores recibe un tratamiento especial por parte de la colectividad o el Estado porque se considera que es un oficio socialmente importante y debe ser desempeñado bajo condiciones dignas que incentiven a su ejercicio y al reclutamiento de

nuevos educadores. Sin embargo, ante reformas que pretendan mejorar el servicio educativo, el grupo presenta argumentos en contra que no se refieren al objetivo educacional propiamente dicho sino a que esta reforma desmejora el estándar de vida que han alcanzado sus miembros y esa defensa se lleva a cabo tan eficazmente que termina frustrando la reforma educativa propuesta. Se trata de un ejercicio estéril que no es sino una defensa del pasado y de condiciones ya insostenibles.

Ahora bien, la interpretación de que el gobernante tiene un proyecto probablemente es demasiado optimista en unas condiciones donde los políticos parecen más preparados para ganar una lucha electoral que para el posterior ejercicio del gobierno. Cuando lo asumen, el proyecto a menudo resulta ser el de los grupos financieros que los ayudaron en la campaña y ello es un factor de ingobernabilidad por hacerse patente que el gobernante no es sino un ejecutor de intereses sectoriales contrapuestos al bien general y aun cuando ello sea falso si la sospecha se generaliza perderá en disiparla buena parte de su energía.

También resulta perturbador cuando los gobernantes toman decisiones que contradicen lo que han sostenido ante el electorado. La política aparece así como un ejercicio de engaño y la irritación aumenta cuando los dirigentes sobrestiman su poder y se permiten seguir adelante con su designio sin molestarse en explicar a la colectividad las razones que justifican su brusco giro. Buena parte de las críticas en boga a la llamada democracia representativa tienen su origen en la recurrencia de este hecho. Por otra parte, el progreso de la educación y la acción de los medios hacen a la ciudadanía cada vez más exigente respecto de los políticos. A pesar de que no esté dispuesta a dedicar mayor esfuerzo al quehacer público, o a hacerlo dentro de muy reducidos límites, sí se siente capacitada para criticar inmisericordemente a los políticos o a quejarse de que las opiniones del público sean ignoradas por los círculos pequeños y cerrados donde se toman las decisiones. Cuáles sean tales opiniones no se sabe muy bien o si se expresan no pasan de lugares comunes o invectivas destempladas. Por este lado también la intensa crítica doctrinal a la representación parte, demasiadas veces, de suponer la existencia de opiniones articuladas en el común y lo que hace es únicamente dotar de armas conceptuales al tradicional resentimiento de los conducidos contra sus conductores. El problema no es la crítica, frecuentemente merecida, a los dirigentes sino el que pase a convertirse en la negación misma de la necesidad de dirección y en que se piense o se finja pensar que es posible evitar que las de-

cisiones se tomen por grupos reducidos, por más que éstos hayan sido previamente todo lo participativos y consultativos que se quiera.

De una forma u otra todos convenimos que gobernar en democracia es más difícil que hacerlo sin ella. No obstante pensamos que el concepto de *governabilidad* está vinculado al gobierno democrático porque lo que no sea democracia es, más bien, *desgobierno* pero este es un razonamiento sutil de la opinión ilustrada que probablemente en Latinoamérica no pase de la superficie, ni se sostenga más que por su prestigio tan avasallador pues para el hombre común las negociaciones, a menudo prolongadas, que requiere la democracia le parecen provocadas por ella misma y que si tienen éxito terminan reduciendo a lo anodino la obra de gobierno ofrecida y el gobernar a una actividad puramente residual e insignificante. Según esta óptica a ello contribuye, además, otro fenómeno difícil de entender como es el de la *oposición*. Una actividad, según se ve, consistente en una permanente crítica al gobierno, artificialmente alimentada por una gente, *los políticos*, cuya existencia y justificación no terminan de comprenderse. Los calificativos que inmediatamente surgen para hacer entender el fenómeno opositor tal como llamarlo *responsable* o *institucional* no ayudan mucho al basarse en la idea, también ardua de digerir, sobre la necesidad de limitar el poder. El juego electoral se convierte, asimismo, en otra fuente de desconcierto. La política aparece como un oficio especializado en ganar elecciones pero no en gobernar. Nada más decepcionante que contemplar la astucia y destreza que despliegan los políticos para lograr el poder y luego encontrar que, una vez obtenido, carecen de ideas sobre lo que van a hacer con él y cómo pronto pasan del entusiasmo y la euforia a sentirse impotentes y abrumados. Se oscila así entre la condescendencia con el gobierno de turno y la frustración iracunda. Quien pretende romper ese círculo vicioso, mostrándose implacablemente consecuente hasta el extremo de “revolucionario”, obtiene una simpatía que no puede despacharse simplemente como expresión de pulsiones autoritarias. En todo caso hay una enorme labor de educación política por delante para que se comprenda que una cosa son los límites a la arbitrariedad gubernamental y otra los obstáculos a la gobernabilidad y que los primeros no necesariamente equivalen a los segundos.

Por lo menos esto es lo que demuestra la situación política venezolana bajo el régimen de Hugo Chávez. Mientras duró la bonanza petrolera el público se mostró condescendiente con los políticos, pero tan pronto ter-

minó¹ se pasó de la condescendencia a la frustración iracunda. Chávez, en cambio, se mostró implacablemente consecuente, hasta el extremo de “revolucionario”. La revolución, como elaboraremos posteriormente, no es una teoría para el gobierno sino para la agitación pero parece que ofreciera un programa. Por lo menos el espejismo de que ya no va a haber concesiones oscuras e injustas y el empantanamiento de interminables y turbias negociaciones o el espectáculo de políticos como Carlos Andrés Pérez que creían poder pasar impunemente del populismo intervencionista a una política de ajuste macroeconómico por obra y gracia de su ascendiente sobre las masas. Hay mucho, ciertamente, de las mencionadas pulsiones autoritarias en tales reacciones pero también de desencanto con la política democrática tradicional como simple arte de ganar mayorías.

De esta manera, mientras la democracia alentaba un incontrolado avance de particularismos gremialistas de todo tipo, sembraba también la inconformidad creciente de quienes veían la pérdida de sus beneficios en parte por efectos incontrolables del mercado mundial petrolero y en parte por la incompetencia y falta de ética de quienes gobernaban.

II. REVOLUCIÓN Y GOBERNABILIDAD

El rasgo fundamental de la turbulenta época que precedió a Chávez pudiera sintetizarse como la exaltación del cambio. Si habíamos de apoyar a alguien era porque representaba el cambio y si habíamos de rechazarlo era porque, abierta o disfrazadamente, era un enemigo del cambio. El tema no es nuevo. Todas las campañas electorales se reducen a la lucha entre quienes dicen que lo que se ha hecho es bueno y hay que mantenerlo y quienes dicen que es malo y hay que cambiarlo. Lo curioso de las venezolanas es que todos decían que querían cambiar; nadie que quería continuar algo.

Se diría, entonces, que los venezolanos somos un pueblo revolucionario porque la revolución es la expresión máxima del cambio. Sobre las ruinas de un viejo orden se construye otro que supuestamente carecerá de los vicios del anterior. Ya no serán necesarias las penosas componen-

¹ “La historia venezolana de los últimos 20 años ha sido el gigantesco ajuste de un país que pasó de recibir 1590 dólares reales *per capita* en promedio anual por exportaciones petroleras de 1953 a 1981: a la mitad de eso entre 1982 y 2003, es decir, 890 por venezolano al año”. España N., Luis Pedro, “Petróleo con whisky”, *El Nacional*, 16 de octubre de 2004, p. A8.

das que se necesitaban para lograr objetivos importantes. Pero esta esperanza contiene a su vez curiosas paradojas. Si fuera cierta habría bastado la primera revolución para que se hubiera instaurado una situación de felicidad permanente que, a su vez, conduciría a la conservación feroz, y por lo demás justificada, de lo logrado.

La realidad enseña que no es así. Que se crean nuevos intereses y también son necesarias laboriosas negociaciones entre los nuevos factores de poder. La revolución se desvía de los ideales que proclamó. El revolucionario consecuente debería ser partidario, entonces, de la revolución permanente y de la revolución dentro de la revolución. Pero la revolución permanente es un absurdo lógico y psicológico. En algún momento hay que parar el cuestionamiento y arremangarse los brazos para el trabajo cotidiano y aburrido y, de todas maneras, los pueblos se cansan de ser *hamaqueados* de un lado a otro por una promesa utópica tras otra.

Finalmente terminó, sin embargo, imponiéndose una alternativa que se dice revolucionaria y todavía hoy la palabra revolución suscita expectativas infundadas puesto que el gobernar bien debe ser diferenciado del gobernar revolucionario.

Hay diversas razones para considerar que una y otra cosa son incompatibles. El revolucionario pretende que con su gestión todo comienza de nuevo y no siendo posible tal cosa no le queda más remedio que construir sobre el pasado. De manera que el sistema que se considera expresión de la máxima originalidad política resulta ser el más falso y no auténtico.

Una de las características del régimen de Chávez ha sido que en la difamación de los cuarenta años de sistema democrático que lo precedieron no se trató simplemente de contraponerse a gobiernos concretos sino a toda una “República” precedente, la cuarta, y a todo un orden constitucional. No bastaba, en efecto, una ruptura electoral, era necesaria también una ruptura jurídica. Esta ruptura no fue solamente con la Constitución anterior sino contra la misma que se dictaba en 1999. La Asamblea Constituyente, según dictamen de una reestructurada Corte Suprema de Justicia² no sólo era supraconstitucional respecto de la ley fundamental de 1961 sino también en cuanto fuera necesario para que durante la transición de un orden a otro se asegurara el pleno desmantelamiento del an-

2 Sentencia (expediente núm. 1110) del 14 de octubre de 1999 y 5 votos salvados. Tribunal Supremo de Justicia, *Bases jurisprudenciales de la supraconstitucionalidad*, Caracas, 2002, pp. 37-69.

terior. Esta forma de instaurar la nueva República provocó críticas y disidencias tempranas pero aún se siguió pensando que se inauguraba una brillante etapa del constitucionalismo venezolano regida por una Constitución plenamente garantista y mucho más avanzada que la de 1961 por estar en plena sintonía con el principio del valor normativo de la Constitución.³

Tanto optimismo nunca lo hemos podido comprender ya que siempre hemos pensado que cuando este ordenamiento fue aprobado nada menos que para refundar la República y crear un nuevo ordenamiento jurídico lo que se hacía era ofrecer un pretexto para convalidar atropellos posteriores por la apelación a la fuerza bajo el manto de un principio revolucionario. En este sentido poco importa que en la Constitución no aparezca por ninguna parte la palabra revolución. Se comprende, pues, que en el seno de un sistema semejante alienta la más completa inseguridad jurídica y carece, por lo tanto, de uno de los fundamentos de la gobernabilidad.

En los niveles de la ejecución constitucional y administrativa es más arduo romper la continuidad institucional. Aunque no se lo confiese es todavía más acentuadamente, heredero de una obra anterior pero, al menos, se realiza el rito simbólico de la ruptura a través de una intensa liturgia bautismal de organismos del Estado con nuevos nombres, desde los de fomento científico hasta las de seguridad y orden público, con la curiosa excepción de la policía política, que se explica por la disidencia o el desprestigio de quienes habían desarrollado los proyectos para reestructurarla. El asunto sería divertido y poco digno de mención ante el hecho evidente de que con cambios de nombres no mejora la eficiencia estatal si no fuera porque en un país donde ha sido tan difícil instaurar tradiciones de servicio público, el cambio de terminología agudiza la

3 García de Enterría, Eduardo, “El valor normativo de la Constitución española de 1978”, en varios autores, *Constitución y constitucionalismo hoy*, Caracas, Fundación García-Pelayo, 2000, pp. 65-91. La atmósfera intelectual de la comunidad jurídico-constitucional para la época puede apreciarse en Ortiz-Álvarez, Luis y Lejarza A., Jacqueline, “Estudio preliminar”, *Constituciones latinoamericanas*, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1997. La nueva Constitución aparecía como un avance por su consagración, entre otros aspectos, de los derechos de tercera generación, la justicia constitucional, la reivindicación de los indígenas, la democracia participativa, etcétera.

conciencia de la fragilidad de las instituciones y su estar a la merced de los cambios políticos.⁴

Probablemente hoy en día no sea posible instaurar una dictadura del proletariado. El desprestigio del sistema bolchevique ha sido total y ha dejado más huella de lo que están dispuestos a reconocer sus más radicales epígonos. Ellos retroceden ante la perspectiva de que se los pueda acusar de negar la democracia y el pluralismo. Además, la conciencia de los derechos humanos y el tramado institucional internacional para protegerlos es demasiado denso para que los revolucionarios puedan permitirse enfrentarlos pese a todas sus proclamas de actuar soberanamente. El régimen de Chávez se mueve en este cuadro de fuertes restricciones y ha sabido apretar adentro mientras mantiene hacia fuera un cariz de respetabilidad democrática. Sólo quien padece las circunstancias venezolanas comprende el juego de mantener una riña permanente desde el poder con todo tipo de adversarios, amenazando sin llegar nunca al crudo extremo represivo pero avanzando palmo a palmo en la tierra de nadie donde no se conmoverán los actores internacionales pero si sufrirán en carne propia los opositores el estrechamiento del cerco, la desmoralización y la pérdida de libertades.

Revolucionar no significa, pues, gobernar. A las razones expuestas hay que agregar que el revolucionario en función de gobierno no puede prescindir de ser un atizador de conflictos. El gobierno revolucionario debe estar en constante pelea con unos contendores reales o imaginarios y de esta manera va sembrando permanentemente las semillas de la disolución social. Las sociedades que logran salir del espejismo revolucionario ya sea por rebelión o colapso del sistema son sociedades en ruinas porque la necesaria cooperación social fue sustituida por una armadura artificial de coerción y violencia y es muy difícil volver a reconstruir el tejido social cooperativo.

Un ejemplo de trivialización trágica de la complejidad ha sido la política del oficialismo respecto de la clase media. Ésta formó parte de la amplia coalición de la base electoral que lo llevó al poder. Pero, después de la luna de miel se inauguró un periodo de ataque a dicho sector al que se lo veía como la cantera de todo el esfuerzo opositor; sin embargo, se-

4 “A quienes llegamos un día a Venezuela nos impacta el carácter transitorio de casi todo: diseño urbano, locales comerciales, restaurantes, proyectos, responsabilidades”. Marulanda, Valentina, “Los desafíos de la Biblioteca Nacional”, *El Nacional. Papel literario*, 16 de octubre de 2004, p. 4.

mejante estrategia equivalía eliminar el amortiguador más efectivo de las contradicciones y tensiones sociales y provocarlo hacia una beligerancia cada vez más militante. Posteriormente se percibió el error cometido pero ya era demasiado tarde.

Así, en Venezuela, hemos visto y sufrido los estragos del gobierno convertido en el principal agitador. Es inevitable porque el revolucionario tiene que buscar siempre una querrela. Si ya tiene domeñada a la sociedad que rige buscará un enemigo externo. El conflicto sirve al objetivo de movilizar a las masas y mantenerlas en permanente alerta revolucionaria. Se alberga la concepción de que si ésta decae, decaerá el fervor y, por consiguiente, lo que se haría es engrosar la lista infame de los gobiernos que no han realizado nada o han conducido sus países hacia un destino perverso. Estará siempre tratando de dejar sentado que sus fines son nobles, y facciosos quienes no los aceptan. No se trata meramente de una cuestión de idiosincrasia individual sino de la lógica de una concepción de gobierno. Si tomara las cosas con normalidad y fuera del paroxismo conflictivo se sentiría perdido y errático. Cada desafío del enemigo en lugar de hacerlo sentir sumido en un vértigo de acontecimientos que no lo deja gobernar le proporciona, por el contrario, mayor energía. Si la oposición convoca una manifestación él replica con otra. Cuando Chávez creó una nueva situación constitucional que generó la necesidad de una elección tras otra o cuando se vio confrontado a un referendo revocatorio se pudo contemplar el funcionamiento de su espíritu y lógica de gobierno. Como le han tocado unas circunstancias en que los enemigos no pueden ser exterminados por los métodos dictatoriales tradicionales ha desarrollado creativamente, hay que reconocerlo, el método electoral como forma de aniquilación. Sus segundones, sin embargo, no son capaces de acompañarlo a un ritmo tan vertiginoso. Lo que ven es que a su admirado líder no lo dejan gobernar. En el fondo quisieran una pausa en esta incesante riña pero mientras llega el agotamiento al que esta situación está ineludiblemente condenada les parece convincente el argumento de que Chávez no busca el conflicto sino que lo llevan a él; que no es el provocador sino el provocado.

Pero el socavamiento revolucionario es más profundo y siniestro. En el fondo la revolución no puede convivir con las instituciones, ni siquiera las que ella misma crea porque éstas, al fin y al cabo, tienen que conservar ciertas apariencias y acatar algunas formalidades que llegan a convertirse en obstáculos inesperados a la revolución. En el caso venezolano

se ha visto como al lado de los organismos represivos se han desarrollado, protegidos y alentados por el gobierno, toda una serie de grupos que se encargan de amedrentar las manifestaciones opositoras o la labor de periodistas que trabajan en medios no afectos al oficialismo. Ya las primeras declaraciones del presidente convalidaban la teoría de que la delincuencia es un producto de la injusticia social y las acciones gubernamentales posteriores han hecho que no sea posible una descripción del sistema político venezolano que no incluya entre sus ingredientes el papel de los aparatos paralelos al Estado que van desde las bandas de matones, pasando por los invasores de propiedades hasta las asociaciones de *buhoneros*, y que se sienten alentados a tomarse justicia por sus propias manos.

Los revolucionarios que alcanzan a gobernar son, pues, incapaces de crear una estructura jurídica que merezca tal nombre. Si lo permitieran dejarían de poder seguir alegando la revolución como justificación de sus constantes violaciones al derecho. Necesariamente se ven obligados a crear estructuras paralelas a las formales y por ello el Estado se convierte en un ente desarticulado y contradictorio. Detrás de toda su aparatosidad y retórica sólo se esconde la vieja fórmula de la fuerza sobre el derecho, sólo que con un rostro más aceptable para la mitología de la modernidad; pero también de acuerdo a la antigua máxima según la cual el fin justifica los medios.

III. EL DOBLE ESTADO

Ernst Fraenkel desarrolló, por la misma época en que se daban los acontecimientos, una concepción sobre la dualidad de las estructuras estatales en el Estado totalitario nazi que con las debidas modificaciones ayuda a comprender lo que ocurre en Venezuela.⁵

En Venezuela el doble Estado no es sólo la existencia paralela de dos derechos sino también de estructuras de salud y educación paralelas a las

⁵ Fraenkel, Ernst, *Der doppel Staat*, edición reciente por Alexander von Brünneck Europäische Verlagsanstalt 2001, 2a. ed. revisada, publicado originariamente en inglés, Oxford University Press, 1941; pero debemos aclarar que, a diferencia de Hitler, Chávez, por una parte, sí cambió la Constitución y, por la otra, ha destituido a su antojo a los jueces y removido masivamente a los funcionarios. Sin embargo, la estructura dual, bajo diferentes formas y versiones, nos parece que es un sino inevitable de los sistemas revolucionarios de distinto signo.

tradicionales. La red de ambulatorios y hospitales públicos yace en el abandono como una especie de castigo a la desafección de los médicos con el proceso revolucionario, mientras se lanza un programa de medicina en los barrios con el apoyo cubano cuya gravedad no consiste tanto en los comprobados errores médicos que comete el personal enviado por Fidel Castro sino en el desprestigio y la infamia a que queda librado todo un largo esfuerzo sanitario anterior y a la formación recibida por los médicos venezolanos.⁶

El sistema educativo formal en sus diferentes niveles, tanto el básico como el de secundaria y la educación superior presencian que a su lado se desarrollan otras políticas aparentemente espectaculares por su carácter masivo para proporcionar en tiempo record grados de primaria, secundaria y hasta títulos universitarios y, además, se crean universidades enfrentadas en su concepción a las públicas autónomas que el gobierno aún no ha logrado dominar. En este sector se ha desarrollado también un poderoso ente coordinador que dispone de un presupuesto paralelo al de las universidades públicas y que constituye un eficaz instrumento de la política educativa paralela.

Seguramente tanto el sistema de salud como el educativo no carecen de responsabilidad en muchas de las deficiencias y errores que los plagan y la lección que han recibido tendrían que aprovecharla desde ya, pero las alternativas que ha generado el régimen no son, precisamente, muestra de buen gobierno. Están afectadas por un carácter episódico determinado por la severa prueba a la que estuvo sometido Chávez cuando tuvo que aceptar el referendo revocatorio y se esforzó en lograr postergarlo al máximo para entretanto desarrollar las llamadas misiones que es el nombre oficial de estos operativos⁷ sanitarios y educacionales. Depen-

6 “¿Y tienen médicos venezolanos?, preguntó Derbez. —No. Todos son médicos cubanos. Los habrá cuando los médicos venezolanos tengan realmente la conciencia y la ética para poder atender al paciente y poderlo auscultar”. “Canciller mexicano fue llevado a conocer el plan Barrio Adentro”, *El Nacional*, Caracas, 16 de octubre de 2004, p. A11.

7 Mi colega Graciela Soriano ha desarrollado unas consideraciones sobre la racionalidad pública venezolana donde desempeña un papel fundamental la idea del operativo “producto de la incapacidad para hacer las cosas a su tiempo, y para mantener en funcionamiento la totalidad del sistema en el que, precisamente por ello, necesidades sectoriales apremiantes exigen errática o recurrentemente satisfacción inmediata”. Las “misiones” continúan, pues, una tradición del sector público venezolano. Esta idea tiene relación con otras que manejamos en este trabajo e incluso con el tema del militarismo pues una de las formas típicas de actuar de los militares son los llamados POV (planes operativos vigen-

den, además, de la plétora de ingresos por hidrocarburos que dispone el país los cuales soportan el enorme gasto y también su ineficiencia.

Pero no sólo se trata de eso sino, más importante todavía, de la concepción que anima las misiones. El envío masivo de médicos cubanos a las barriadas podrá ser una acción efectiva a corto plazo pero no hace sino consolidar la forma de vida marginal facilitándola. Recuerda mucho la crítica tradicional de la izquierda a la caridad religiosa. Sólo que aquí se trata de caridad practicada por el Estado. En definitiva se trata de bajar servicios médicos y educativos precarios a gente en precariedad en lugar de que esta acceda a modernas redes sanitarias y de salud que les muestren, además, la posibilidad de otros paradigmas de asistencia e, incluso, de vida.⁸

Los operativos de las misiones no se limitan, sin embargo, a los campos indicados sino que van surgiendo de acuerdo a un proceso espasmódico detrás del cual difícilmente se advierte una política pública organizada. Además de los descritos los hay también contra el desempleo y para el problema de la vivienda todos ellos tienen como denominador común diferentes tipos de subsidio en efectivo o en especie y su destino es incierto pues dependen de los elevados precios del petróleo y del manejo incontrolado de las finanzas públicas.⁹

IV. MILITARISMO Y GOVERNABILIDAD

El sistema político venezolano parece oscilar monótonamente entre el militarismo y la subversión. La falta de desarrollo de una sociedad civil, de opiniones moderadas y dispuesta a un largo y arduo trabajo de re-

tes). *Las formas de entender la racionalidad en el ámbito público* (paper para la reflexión, inédito).

⁸ "...cada vez menos, el habitante del barrio saldrá "afuera". Cada vez más, el que vive en un barrio considerará al barrio como su único universo...". Carriles, Colette, "Barrio adentro: una técnica de exclusión", *El Nacional*, Caracas, 31 de agosto de 2004, p. A4. Derbez: "...cuando llegue el momento de la enfermedad, de pasar a otro nivel, a pesar de que haya clínicas de otro tipo, van a tener que tener los hospitales y las clínicas suficientes", *op. cit.*, nota 6.

⁹ Rachadell, Manuel, *Estudio sobre las implicaciones jurídicas de la creación del Fondo Especial de Desarrollo en PDVSA* (inédito). El autor muestra como la creación del Fondo (\$2,000,000,000) por la empresa petrolera violó las competencias del Banco Central y una serie de principios y preceptos constitucionales.

construcción política, alimenta el ciclo. Los paréntesis de democracia y libertad han tenido así orígenes y fundamentos ambiguos y poco sólidos. Desde que se constituyó el ejército nacional con Gómez, los civiles han recurrido a éste como la panacea de los males políticos. Es la monótona historia que comienza en 1936, se plantea en la sucesión de López Contreras, estalla el 18 de octubre de 1945, toma un giro contrapuesto el 24 de noviembre de 1948, se reanuda en 1958 y, no sin justificación, se consagra políticamente el 6 de diciembre de 1998 e institucionalmente con la nueva Constitución. Los que apelan al mismo recurso contra el actual régimen parten de iguales bases, sólo están disconformes con la orientación. Para tal imaginario el golpe de Estado militar es la fórmula final de conjurar la turbulencia social o simplemente la incapacidad de los políticos de turno. Los hombres de armas aprendieron pronto la lección y decidieron seguir su camino propio y durante largas épocas se convirtieron en el factor principal de poder.

Ahora bien si gobernar significa persuadir y acordar tanto como mandar y reprimir, la dirección de los asuntos públicos en manos de aquel estamento formado en la conducta y actitudes de ordenar y obedecer paradójicamente se convierte en un factor de ingobernabilidad. Hoy en día, sin embargo, no parece posible en América Latina, después de las experiencias dictatoriales de la década de los setenta del siglo XX, una dominación militar de este tipo. Sin embargo, el militar en función de gobierno aunque trate de respetar las formas civiles tenderá a impacientarse con ellas y, de alguna manera, a quebrantarlas. Existe un grave peligro de infracciones sistemáticas del ordenamiento jurídico el cual se verá como un estorbo a la actuación eficaz del Estado e incluso se recurrirá al cortocircuito de la corrupción para acelerar la obtención de resultados.

A nuestro modo de ver no se comprende al régimen de Chávez si no se tiene en cuenta su peculiar combinación de militarismo y revolución. Saltarse las restricciones del juego político y del ordenamiento jurídico produce una singular confluencia entre ambas concepciones del poder. Hasta el momento el peculiar experimento venezolano ha resultado exitoso para quien lo dirige. A fuerza de la voluntad de imponer una dirección única al Estado se han desmantelado casi todos los ámbitos de autonomía de las instancias públicas que se considera deben existir en una *polis* moderna. El proyecto de una empresa petrolera estatal independiente de los avatares de la política yace hecho trizas. Los inmensos re-

cursos del petróleo están a disposición completa de los designios gubernamentales; para lograrlo no sólo se realizó una purga de unos 20,000 empleados y gerentes de su personal sino que también se atentó, cuando fue necesario, contra la autonomía del Banco Central. De esta manera si la estabilidad democrática de los cuarenta años anteriores se atribuyó por numerosos analistas a los recursos petroleros habría que concluir que el proyecto de Chávez, con un control completo sobre la empresa productora, tendría asegurada aún mayor duración. Si a esto se suma el control de los poderes públicos propiamente dichos, en verdad habría que concluir también que el actual Estado venezolano se ha convertido en una monolítica estructura de mando centralizado vertical. Para completarla sólo faltaba la toma de los gobiernos locales y de los estados en manos de la oposición, el control de las universidades públicas autónomas y la regulación de los medios de comunicación si no expropiados por lo menos neutralizados en su capacidad crítica.

El sistema centralizado y militarizado tiene que desenvolverse, sin embargo, en un medio externo que no controla y, en lo interno, la misma centralización y homogeneización de todos los factores de poder le hace perder los necesarios frenos preventivos o críticos a sus actuaciones erróneas y desastrosas lo cual se agrava con la concentración de todas las responsabilidades no sólo en un centro sino también en un centro caudillesco y personalista. Esta situación no es realmente de gobernabilidad pese a toda la concentración de poder que disfrute.

La relación entre poder civil y militar en Venezuela nunca ha sido afortunada ni tenido un desenlace claro. Cada sector ha sentido que el otro lo amenazaba e impedía su desarrollo pleno. En los cuarenta años que precedieron al régimen de Chávez se logró un equilibrio precario en el que los militares, sin embargo, resintieron que se los manipulaba y se había logrado controlarlos mediante artificios políticos. Las disposiciones sobre el estamento militar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente de cualquier otro análisis, reflejan la realización final de sus contenidas aspiraciones. En esta Constitución ya no se habla de las Fuerzas Armadas sino de la Fuerza Armada integrada por lo que ahora se llama componentes pues se considera que el plural representa dispersión en lo que debiera ser un poder concentrado que los civiles se encargaron de fraccionar. En realidad este cambio plasmó más las intenciones hegemónicas del ejército que una concepción compartida con la aviación y la armada. Estas carecen de la

potencia y el número como para hacer contrapeso a la fuerza de tierra y en esa situación hay muchas tensiones y un germen de discordia pero, por el momento, aparece como una reivindicación exitosa frente a la doctrina militar de los partidos anteriormente gobernantes.

Adicionalmente los ascensos a los altos grados militares, arrancados al Parlamento pasan a ser atribución exclusiva del presidente. La Constitución específica que dichos ascensos deberán realizarse por antigüedad, mérito y plaza vacante pero lo cierto es que una cuestión de tan alto interés público ha pasado a ser manejada en el círculo restringido del teniente coronel Chávez y sus mandos leales. Dentro del contexto de una concepción revolucionaria la facultad se convierte en un poderoso recurso para la configuración de un tipo de corporación militar contraria al modelo democrático pluralista.

Es dentro de la perspectiva ominosa que abre tal designio como debe evaluarse la otra disposición clave de la nueva Constitución militar: el voto de los militares. En el régimen anterior la discusión sobre el voto militar siempre concluía en que la medida era inconveniente porque politizaría las fuerzas armadas. Los que la defendían procuraban, en cambio, minimizar el peligro de politización y alegaban el ejemplo de países donde los militares sufragaban en las elecciones como el resto de los ciudadanos. Ahora que la institución está establecida hay que aceptar que el primer bando comprendía más acertadamente la realidad venezolana pues sus aprensiones se han confirmado con creces. Esta reforma que pudiera considerarse anodina en el marco de una fuerte institucionalidad civil, en las condiciones de politización revolucionaria de los militares desbarata completamente todo un conjunto de dispositivos que tenían sentido en el viejo sistema pero que ahora se convierten en instrumentos en manos de la parcialidad política en el poder y en contra de las fuerzas opositoras. Nos referimos al Plan República, una operación que se activa en épocas de elecciones para asegurar la logística de los materiales electorales, la seguridad en los días de votación y luego el transporte y resguardo de los votos. Ya este papel tan decisivo de los militares en el acto más eminentemente cívico revelaba una cierta incapacidad del mundo civil venezolano para organizarse por sus propios medios y fijaba una imagen desfavorable frente a los militares que sí dispondrían de la capacidad correspondiente; pero en el sistema anterior se había logrado una alto nivel de neutralidad de los funcionarios armados; ahora ya no hay garantías. Si los hombres de armas eran siempre el último recurso de organiza-

ción y disciplina, si lo civiles siempre añoraban el momento en que las hubiera, era cuestión de tiempo nada más para que éstos reclamaran un papel conductor más definido e invasor incluso de la política. En los últimos actos electores y especialmente antes del referendo revocatorio se evidenciaron comportamientos de estos funcionarios, soldados y oficiales, que convierten al Plan República en una amenaza contra la libertad y pureza del acto electoral y no en una garantía.

Transformado el elemento militar en partido armado revolucionario se ha llegado a la distorsión de que ya los militares no realizan adecuadamente las funciones que les son propias ni tampoco las de gobierno que ha asumido. Ejercen labores de orden público y se aplican a neutralizar o reprimir a la oposición o a hacerse de la vista gorda frente a los ataques que manifestaciones reciben por parte los grupos irregulares favorables al oficialismo. La corporación militar se ve afectada también por la lógica del doble Estado. Las tradiciones heredadas de mando y disciplina tienen que ceder ante las nuevas exigencias y se produce una coexistencia precaria de mandos antiguos y mandos emergentes revolucionarios.

V. REFLEXIONES FINALES

Por más que tratemos de ser equilibrados al considerar las limitaciones a que está sometido el oficio de gobernar, de ninguna manera deben llevarnos a perder de vista que el poder es capacidad de hacer y, por lo tanto, disposición de recursos con los que, de otra forma, no se contaría. Si no se los utiliza, como debe hacerse, hemos de tachar al gobernante pero no considerarlo víctima.

No obstante es necesario reconocer que en nuestro medio latinoamericano abunda una especie de laxitud entre mucha gente que se dedica a la política y cuando tiene el supuestamente anhelado poder no sabe qué hacer con él; no tanto por carecer de conocimientos o preparación sino porque se imaginó demasiado fácil la tarea de gobernar o nunca estuvo dispuesta verdaderamente a ejercer el gobierno o, peor aún, porque sólo lo vio como una oportunidad de aprovechamiento personal. Las actitudes correctas para el gobierno deberían ser objeto de cultivo en las escuelas de gobierno y gerencia pública. Ellas se engloban en la afortunada expresión “voluntad política” que también podría designarse como voluntad de gobierno. Efectivamente, la política es la actividad que configura y

enrumba a todas las demás y si no se ejerce la sociedad está a la merced de diferentes intereses sectoriales.

En este sentido también es necesario reconocer que Chávez ha mostrado que en Venezuela se podía llegar más allá de lo que la política y los políticos anteriores concebían. La forma como lo ha logrado tiene mucho de destructivo y maligno debido a un error fundamental que consiste en creer que configurar y enrumbar significa desconocer las exigencias objetivas de las distintas realidades que confronta el gobernante (económicas, culturales, sociales) y someterlas a un *diktat* político que termina en el absurdo. Le ha sido posible por las reservas de tolerancia de una sociedad domesticada por cuarenta años de democracia.

De todas maneras, mucho de lo que Chávez ha hecho en forma perversa para enfrentarse a la exagerada influencia en la política de los medios de comunicación, para controlar la tecnocracia petrolera o establecer una administración tributaria eran asignaturas pendientes. Esta voluntad de enfrentamiento es producto de una formación como la militar que prepara para el mando y los conflictos. No eludirlos debería caracterizar también al gobierno civil cuando sea necesario pero quizá en América Latina el predominio político de los militares durante tanto tiempo, se ha debido a que el estamento político no ha comprendido tan evidente principio.

Pero Chávez tampoco es un militar típico. De ninguna manera la necesidad de gobierno y del gobernar significan que el gobernante se encierre en un mutismo ubicado en las alturas de su eminente posición. Es demasiado frecuente ya la alabanza a aquellos gobernantes que son calificados como “grandes comunicadores” como para pensar que no expresa una necesidad sentida por vastos sectores. Chávez la satisface pero en un sentido diferente a lo que postula cierta mitología de la participación. Según ella el gobernante debe consultar y explicar las decisiones del gobierno. Consultar, porque permite descubrir criterios y proposiciones valiosos que, de lo contrario, serían descuidados o no tomados suficientemente en cuenta. Explicar, porque es requerido por un público cada vez más educado y consciente de que debe ser tomado en cuenta: se trata de una función educativa. El actual presidente venezolano apenas consulta y casi no explica, más bien agita. No se dirige a una masa ilustrada sino a quienes supuestamente han estado perpetuamente excluidos por los ilustrados. No convence sino que insulta pero persevera en una suerte de contacto personal e inmediato con sus seguidores. Ciertamente modela a la sociedad pero este modelaje toma el curso de una destruc-

ción sistemática de todo lo que pudo ser valores compartidos y ahonda las divisiones sociales.

Cualquiera que haya tenido un mínimo contacto con el gobierno de los asuntos humanos, así sea los de su propia familia, se da cuenta de lo difícil que es llevarlo a cabo. La tentación es grande a intentar fórmulas estrepitosas de resolver el problema. Es lo que llamaría gobierno con bulla. En Venezuela nos especializamos en hacer bulla para gobernar. Bulla es la del recién nombrado funcionario que antes de tomar posesión de su cargo lanza ominosas advertencias de que su gestión comenzará revisando inquisitorialmente todo lo que han hecho sus predecesores. La revisión no está mal; siempre hay que hacerla. Lo inconveniente es la forma de anunciarla porque agrega a un sano propósito administrativo, múltiples mensajes desmoralizantes y atemorizadores a la organización que va a dirigir.

Una manifestación de esta bulla es la declaración anticipada de que lo anterior no sirve para nada y que hay que arrasarlo para empezar todo de nuevo. En este sentido el proceso constituyente fue una forma extrema de bulla gubernativa. El consabido recurso de achacarle todos los males al gobierno anterior se ha magnificado atribuyéndoselos a todos los gobiernos anteriores.

Habría que preguntarse, sin embargo, si es posible gobernar en silencio y si es una alternativa deseable. Habría que preguntarse si no es necesario sacudir tanta inercia con que se encuentra todo gerente público y que lo hace sentirse asfixiado al intentar el más pequeño cambio. Desde este punto de vista hay que reconocer que la bulla es también una consecuencia de la desesperación.

Se trata de un círculo vicioso en el que parecemos irremediablemente atrapados. Si el alto funcionario se concentra en su asunto específico y pasa desapercibido ante la opinión pública siente que lo van a considerar inocuo e insignificante pero si está montando una constante algarabía sobre lo que va a hacer se arriesga a quedar en ridículo porque carece de las bases administrativas que debería estar echando

Ahora bien, una cosa es la guerra cuyo desenlace ocurre explosivamente en una batalla y otra la guerra prolongada de construir la estructura administrativa de un país. El militar celebra inmediatamente el haber destrozado al enemigo, el administrador se mueve en un terreno incierto donde no sabe si ha obtenido el triunfo. En la selva burocrática mil y un asechanzas amenazan su labor. La tentación de cortar por lo sano o de

sumirse en el desánimo son grandes. Sin embargo, el desmantelamiento administrativo sólo será el preludio de la construcción de un nuevo aparato y mientras tanto las buenas intenciones se quedan en el aire sin instrumentos para realizarlas. El desencanto, por otra parte, es una manifestación de inmadurez: una organización es, precisamente, un conjunto de dispositivos que sirven para hacer algo muy distante de lo que el novel gerente se imaginó y para frustrar sistemáticamente cualquier intento de innovación. Es el escenario de una larga marcha cuya victoria sólo será concedida a los pacientes y tenaces.

En Venezuela hemos tenido muchos guerreros y pocos administradores. Los muchos guerreros sistemáticamente han vuelto trizas lo que lograron los pocos administradores. Esos caballeros de lanza en ristre cada vez que llegaban al poder se imaginaban que los fracasos de quienes los precedieron tenían su explicación en una mala voluntad congénita de aquéllos, en la corrupción o en la ausencia de un diseño grandioso o una fórmula simple y luminosa. Pero el mundo del Estado y de la administración pública es demasiado complejo como para ser explicado y manejado de esa forma.

Frente a esta actitud que sigue haciendo estragos y nos condena cíclicamente a reeditar los errores del pasado y a comenzar de cero en cada ciclo, se necesita urgentemente desarrollar un paradigma alternativo de gobierno. A quienes les toque reconstruir a partir del desastre institucional y administrativo en que nos estamos sumiendo les será necesario investigar rigurosamente esta experiencia. Sólo escaparemos de esta situación cuando nos convenzamos de que gobernar no es un acto individual sino una empresa colectiva, un gigantesco proceso de aprendizaje histórico en que cada experiencia anterior, aunque haya sido un fracaso o un error, da su aporte al paso siguiente. Las sociedades desgobernadas son precisamente las que no han aprendido esta lección, las que cada día quieren comenzar de nuevo y cada día hacen más ruido.

En resumen podríamos decir lo siguiente. El gobierno es un recurso demasiado escaso y precioso como para desperdiciarlo en la pura administración del *statu quo*. Gobernar significa algún cambio y para poder cambiar es necesario contar con un proyecto. La revolución disimula tener un proyecto pero no es tal centrarse puramente en el cambio mismo. Necesitamos urgentemente una ética de gobierno que enseñe al prospectivo gobernante a no evadir la tarea de gobierno pero tampoco a pretender que ha de comenzar desde cero pues gobernar es una carrera de fon-

do y no de velocidad; ni tampoco instaurar una riña permanente contra quienes real o supuestamente se oponen al cambio. Esta ética enseñará también que una serie de aspectos que se consideran facilitan el gobierno por el contrario lo obstaculizan gravemente. Así el autoritarismo crea inseguridad. El “revolucionarismo” crea improvisación y una permanente inestabilidad entre otras razones porque cuando el revolucionario se decide a gobernar surgirá siempre una facción extremista que preconizará “la revolución en la revolución”. El conflicto provocado sistemáticamente genera más conflicto. El gobernante conflictivo pierde en forma sucesiva y cíclica valiosas colaboraciones y termina reduciéndose a un grupo mediocre de leales. Finalmente las fórmulas personalistas por mucho entusiasmo que creen en las masas políticamente inmaduras no son sino un espejismo y terminarán abocadas al fracaso porque no responden a las exigencias complejas de las sociedades.

Por último intuimos que si hay algo positivo en las circunstancias críticas que vivimos es el desplome del mito militar como tabla final de salvación o aliado indispensable para establecer una feliz y perfecta República. Las Repúblicas no pueden ser felices y perfectas y si pudieran no son los soldados los llamados a implantar su felicidad y perfección. De esta manera, de manifestación en manifestación, de marcha en marcha, de declaración en declaración de los dirigentes políticos opositores comprobamos, que cada vez se debilita más y más la esperanza de que sean los militares quienes les saquen las castañas del fuego. Es una situación peligrosa en lo físico y de desamparo en lo psíquico pero ha movilizadado y templado de tal manera el ánimo civil que lo encamina hacia una cura definitiva de sus veleidades golpistas.

Por el otro lado, el régimen y la singular izquierda que por él se siente representada han logrado su objetivo de convertir a las fuerzas armadas en la facción más técnicamente armada entre las que los apoyan pero han terminado por desprestigiarlas mortalmente. Para los ciudadanos no son ya garantía de seguridad. En estas condiciones si la derecha ha quedado desamparada del apoyo militar, la izquierda se ha reducido a sí misma al absurdo al acogerse a tal apoyo. Es la muerte de un modelo que nunca pudo impedir la amenaza latente de un iluminado o grupo de iluminados que se creían investidos del derecho a dictar los destinos del Estado sino que de una forma u otra la alentó pues si hubo una culpa militar fue antes que ello una culpa civil.

Como el *nasserismo* en Egipto, el chavismo merece que se le tome como paradigma de un tipo de forma política a la que son propensas sociedades donde tras las apariencias subyace un fondo turbulento de humillaciones no saldadas y una necesidad insatisfecha de acciones espectaculares que, así sea simbólicamente, salden una ancestral frustración. Como el *nasserismo* es un militarismo pero de raigambre popular. Es un personalismo pero que no se limita a la estrechez de un país sino que apela a orígenes históricos, a raíces culturales y hasta étnicas comunes a sociedades separadas por fronteras que consideran artificiales e impuestas por poderes externos.

La tragedia de estos sistemas consiste en su espectacular emocionalidad no compensada por una callada y poco visible labor de construcción institucional y organizativa. En el caso *nasserista* el paradigma se vino abajo y desplomó sin remedio el 5 de junio de 1967 cuando Israel destruye toda la fuerza aérea egipcia en tierra sin darle oportunidad de emprender vuelo. Lo que seguiría, como toda política que trata de acomodarse a las duras realidades, nunca tuvo la misma brillantez para las masas. Para concluir allí no habría valido la pena tanta conmoción y sufrimiento. Mejor habría sido tratar de moverse en el sistema establecido y emprender dentro de éste la laboriosa tarea de reformarlo; problemática y llena de vicisitudes pero al cabo más sólida. Se trata, sin embargo, de un mensaje de poca fuerza ante los torbellinos de la historia.